



JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO  
Magistrado

**DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**TRIBUNAL SUPERIOR**  
**SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno

Proceso: VERBAL (incumplimiento/Resolución)  
Demandante: DANY RAMÍREZ OSUNA  
Demandado: VÍCTOR MANUEL PORRAS B.  
Asunto: niega solicitud de corrección de sentencia  
Radicado: 053603103001 201800051-01

Mediante escrito allegado a la secretaría de la Sala Civil el 15 de septiembre de los corrientes, la apoderada judicial de la parte demandante, solicita corrección de la sentencia nro. 045 proferida por esta Sala el día 14 de diciembre de 2020.

En su escrito manifiesta que el 4 de octubre de 2019, el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ITAGUÍ, dictó sentencia en su favor, pero la condena en costas; la sentencia fue apelada y en el Tribunal, la Sala Tercera emite la sentencia nro. 45 el 14 de diciembre de 2020 y en la conclusión nro. 23 se menciona *"un reparo que se le hará a la sentencia dictada por el A quo con respecto a la condena en costas donde se condenará a la parte demandada a favor de la parte demandante"*, resaltando que en la página de la rama judicial cuando consulta las anotaciones, también se hace referencia al cambio de costas, *"donde se condena a la parte demandada a favor de la parte demandante"*. Afirma que la sentencia del Tribunal, se pronunció sobre el cambio de costas en las conclusiones finales, pero omitió incluir la orden en el resuelve de la sentencia de apelación.

Afirma también, que el día 29 de abril de 2021, llega el expediente al A quo y el 4 de mayo se ordena cumplir lo dictado por el superior. El señor VÍCTOR MANUEL PORRAS BAUTISTA, actualmente se encuentra en proceso de reorganización como persona natural comerciante y por lo tanto, no se le ha podido ejecutar el cobro por \$85.148.523 indexados, pero este a su vez, sí inició proceso ejecutivo conexo con solicitud de embargo ante el A quo para cobrar la condena en costas de \$2.000.000 al demandante.

Es por ello que con fundamento en el artículo 286 del CGP, solicita que por hacerse mención y se evidencia la intención del Ad quem en realizar el cambio de costas de la sentencia del A quo y condenar al demandado a favor del demandante, existe una omisión en la sentencia, al no incluir esta orden en el resuelve y solo dejarla en las conclusiones finales. La omisión de palabras se presentó además en la parte resolutive; por lo tanto, la corrección puede solicitarse en cualquier tiempo.

Siendo el momento para decidir a ello se procede previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES.**

Previo a decidir la petición de la apoderada de la parte demandante relacionada con la **CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA**, es necesario referirnos al artículo 286 del CGP que preceptúa: *"Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.*

*Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.*

***Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en a parte resolutive o influyan en ella".*** (resaltos fuera del texto).

De la transcripción de dicha norma, puede extraerse el cumplimiento de algunos requisitos que deben cumplirse, referentes a que la solicitud se formule en cualquier tiempo cuando haya errores, alteración o cambio de palabras o frases equívocas y que se encuentren en la resolución o se determinen desde la motivación, lo cual supone en el legislador la intención que tuvo de evitar su incomprensión y que se entienda en diversos sentidos.

Según lo ha indicado la Corte Constitucional<sup>1</sup> “la **corrección**, es una solicitud que bien puede presentarse en cualquier tiempo, y no es cualquier razón la que faculta al juez para aclarar o adicionar su decisión, sino que, para lo primero, **deben haberse consignado conceptos o frases oscuras, confusas que ofrezcan verdadero motivo de duda** y que ameriten ser esclarecidas, siempre que estén contenidos en la parte resolutive de la decisión o que influyan en ella”<sup>2</sup>.

La competencia del juez se limita a la corrección del error aritmético o de palabras. La jurisprudencia constitucional ha entendido que este remedio procesal en el primer caso se caracteriza en que “el error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la componen. En otras palabras, la facultad para corregir, en cualquier tiempo, los errores aritméticos cometidos en una providencia judicial, no constituye un expediente para que el juez pueda modificar otros aspectos - fácticos o jurídicos - que, finalmente, impliquen un cambio del contenido jurídico sustancial de la decisión”<sup>3</sup>.

...La misma lógica de corrección se aplica a la segunda categoría **o error en las palabras**, pues el análisis del artículo 286 del “CGP”, antes artículo 310 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”), le permite a la Corte concluir que en esencia recoge dos hipótesis normativas distintas, a saber, la puramente aritmética **y la enmienda de los errores por omisión, cambio o alteración de palabras**, tal y como se consideró en la sentencia T-1097 de 2005 en los siguientes términos: “(...) el inciso final del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil autoriza la corrección de errores por omisión, o por cambio o

<sup>1</sup> Auto 191/18. Expediente D-11306. \$ de abril de 2018

<sup>2</sup> Sentencia T-429 de 2016.

<sup>3</sup> Sentencia T-875 de 2000.

*alteración de palabras, siempre y cuando estén contenidos en la parte resolutive de la decisión judicial o influyan en ella. Sobre el alcance de esta disposición, este Tribunal recogiendo la jurisprudencia expuesta por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que: "Los errores de omisión a los cuales hace referencia el artículo 310 son exclusivamente yerros meramente formales, por razón de la ausencia de alguna palabra o de alteración en el orden de éstas, y no de la omisión de puntos que quedaron pendientes de decisión, cuyo remedio se realiza con base en lo dispuesto en el artículo 311 del C.P.C.// En la primera existen dos extremos (idea y realidad), mientras que en el caso de la omisión, si bien se configura un supuesto fáctico, no hay idea. Por tal razón, el mecanismo contenido en el 310 del C.P.C. sólo se puede utilizar en el punto al primer caso, esto es, cuando existan errores aritméticos o errores del lenguaje derivados de olvido o alteración de palabras (incluidas en la parte resolutive o de influencia en ella), más no cuando hubo omisión de algún punto que se le haya propuesto al juez o que éste ha debido pronunciar. Para este último, existe el mecanismo de la adición, consagrado en el artículo 311 del C.P.C."*

Con los antecedentes citados, es importante anotar que la sentencia emitida no da lugar a equívocos ni genera dudas respecto a las frases que así se consideraron, ni da pie para diversas interpretaciones.

Según afirma la recurrente, en el numeral 23 de la sentencia cuestionada, "se menciona **un reparo que se hará a la sentencia dictada por el A quo...**" lo cual no es cierto. En dicho numeral se indicó: "Al promitente comprador entonces, le corresponde devolver la tenencia material del inmueble en los términos que indicó el A quo y se confirmará la decisión emitida al resolver la solicitud de adición de la sentencia, respecto al reconocimiento de frutos civiles, pero no porque no se haya demostrado la mala fe, como se advirtió sino por las razones que aquí se indicaron. Dado el resultado del proceso, con condena en costas a la parte demandada en favor del demandante. El resto de la decisión no mereció reparos".

Es cierto, que la sentencia de primera instancia le ordenó al demandante hacer entrega del inmueble y lo condenó en costas. También lo es, que el recurso de apelación fue interpuesto por ambas partes, pero no debe olvidarse y en la sentencia de segunda,

se advirtió, que como la parte demandante había desistido del recurso, la competencia de esta Sala **solo estaría encaminada a analizar los reparos formulados por la parte demandada**, única apelante y solo en los temas que fueron objeto de reproche en los términos del artículo 328 y bajo esos presupuestos se desarrolló la inconformidad.

En la sentencia, claramente se indicó que el demandante ha conservado la cosa en su poder y por ello se le condenó a restituirlo y que el demandado (apelante) tenía la carga de la prueba en los frutos que estaba produciendo y no lo hizo. Fue por ello, que se tomó la decisión que allí se indicó y el tema relacionado con las costas, fue precisamente por la decisión que se tomó, porque el motivo de impugnación del demandado no salió adelante, siendo claro que esas costas son las de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 365 del CGP en su numeral 1º. *"Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.... que haya propuesto..."*, tanto es así, que esta Sala mediante auto del 15 de enero de 2021, fijó las agencias en derecho para ser tenidas en cuentas en la liquidación de costas de segunda instancia.

Además, el tema relacionado con si procedía o no condena en costas a la parte demandante en la sentencia que dictó el A quo, no fue motivo de análisis en esta decisión y no obstante lo anterior, hay que indicar que también la última norma citada establece que **cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior**, la parte **vencida será condenada a pagar las costas en ambas instancias** y este tampoco fue el caso. Así las cosas, no están dados los presupuestos y no existe ningún error ni cambio de palabras que hagan viable la corrección pretendida por la parte demandante.

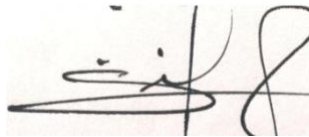
### DECISIÓN:

Por lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL;**

**RESUELVE:**

**NEGAR** la solicitud de **CORRECCIÓN** de la sentencia nro. 45 proferida por la Sala Tercera de Decisión Civil, el día 14 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

**NOTIFÍQUESE**



**(Firma scaneada conforme al Art. 11 del Decreto 491 del 28 de Marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho)**

**JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO**

**Magistrado**